

Al 12 de julio, un total de 75 estudiantes, graduados y docentes de diversas facultades e institutos de la UNL (FHUC, FADU, FBCB, FCE, FCJS, FCV, FICH, FIQ, EIS) y del resto del espectro educativo local y nacional (Instituto Superior N°12, Escuela de Artes Visuales Prof. Mantovani, Escuela Provincial de Cine, UNR, UNER, UNC, UBA, CONICET) adherimos al siguiente documento, redactado por el Espacio Universitario de Reflexión Social de la UNL.

///

FRENTE AL LLAMADO “CONFLICTO DEL CAMPO”

Somos un grupo de estudiantes, docentes y graduados de la Universidad Nacional del Litoral que queremos expresar nuestra posición respecto del así llamado “conflicto del campo”. Integramos un espacio cuyo horizonte es actuar públicamente a partir de la crítica reflexiva y la socialización de los conocimientos producidos con las herramientas propias de nuestro oficio. Consideramos que nuestra Universidad le debe a la sociedad un discurso que no aliente mitificaciones de ningún tipo, ni se someta a la defensa de intereses particulares. De lo contrario, esta institución, cuyos valores se suponen universales, estaría ofreciendo renovados puntos de apoyo para el dogmatismo, la intolerancia política, la estigmatización social y la exclusión económica.

Cuestionamos el planteo del conflicto en términos de la dicotomía gobierno/campo, la cual es deliberadamente sostenida por ambos actores y es amplificada por los medios de comunicación, en su mayoría partidarios del “campo”. Creemos que esa dicotomía oculta el hecho de que tanto quienes han cortado durante 100 días las rutas -desabasteciendo a la ciudadanía y provocando el incremento de los precios de la canasta básica- como quienes han elaborado la resolución sobre las “retenciones móviles” en el marco de su política macroeconómica, son corresponsables de este modelo de país.

El rasgo central del modelo vigente es el mantenimiento del dólar alto (3 a 1). Esto ha habilitado una reactivación económica con tasas de crecimiento sin precedentes, pero que se sustenta en salarios bajos, gasto público insuficiente y grandes facilidades de acumulación para los actores económicos más concentrados. La pobreza, la desocupación, los bajos salarios y la inflación son los verdaderos problemas a resolver. En los términos del debate actual, no terminan de formar parte de la agenda pública como cuestión estructural y con ello no hay perspectivas de encontrarles una solución efectiva. Sin embargo, no son estas las razones que han movilizó al “campo” y a sus adherentes, sino la defensa de sus ganancias extraordinarias.

Frente a los argumentos esgrimidos por el sector agropecuario, afirmamos que las retenciones son una herramienta que efectivamente permite el desacople de los precios internos y externos, evitando un mayor encarecimiento de los productos de consumo popular. En este sentido, quitar o reducir las retenciones, frente a un panorama de aumento indefinido de los precios internacionales de los alimentos, supondría un nuevo retroceso en

las condiciones de vida de la mayoría de la población, incluidos aquellos estratos medios que hoy apoyan el reclamo rural.

Al mismo tiempo, a diferencia de lo sostenido por el gobierno y sus partidarios, creemos que hasta el momento el principal efecto de las retenciones ha sido posibilitar una redistribución de excedentes entre distintos grupos empresarios. Mientras los salarios y el gasto público están sometidos a límites estrictos, distintos conglomerados económicos reciben millonarios subsidios y el pago de la deuda externa aparece nuevamente entre las prioridades del gobierno.

El carácter de las retenciones depende del conjunto de medidas que dan coherencia a un plan económico. Y es por eso que urge planificar democráticamente el desarrollo del país, priorizando la satisfacción de las necesidades de la población trabajadora y el efectivo cumplimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Para ello, reivindicamos la competencia estatal de captar y redistribuir las rentas socialmente generadas, (más aún cuando estas provienen de la explotación de recursos naturales como la tierra, los hidrocarburos, los minerales o los recursos pesqueros) y señalamos la necesidad de avanzar en una reforma impositiva de carácter progresivo. Ni el “campo” ni el gobierno ofrecen una salida en este sentido, pero creemos que la consolidación de un movimiento que, en última instancia (¿o en primera?), impugna la legitimidad y la potestad del Estado nacional de intervenir activamente en la economía nos aleja aun más de la posibilidad de construir una sociedad más democrática, justa e igualitaria.

Paralelamente, el fortalecimiento de ciertos discursos y actitudes que se hicieron visibles durante el conflicto advierten sobre la posibilidad de una enorme regresión política y cultural. En primer lugar, se ha pretendido instalar la idea del “campo” como un espacio de actores e intereses homogéneos. Sin embargo, esta falsa imagen totalizadora oculta la existencia de más de 800.000 trabajadores rurales asalariados, auténticos productores desconocidos en su condición de tales, que padecen los más altos índices de desprotección social y de accidentes laborales, al tiempo que perciben las peores remuneraciones de la economía. Tampoco hay que desconocer la realidad de más de 200.000 trabajadores familiares, sin representación en “las cuatro entidades”, que producen en pequeñas extensiones de tierra, sin explotar trabajo asalariado. Son ellos quienes mantienen una producción diversificada y utilizan tecnologías que no ponen en riesgo los ecosistemas. Son ellos quienes tienen grandes dificultades de acceso a los bienes públicos y están al margen de toda posibilidad de acumular capitales. Y también son ellos quienes fueron y son desalojados de manera violenta e ilegal de las tierras que ocupan, quienes sufren en sus propios cuerpos las enfermedades asociadas al uso de agroquímicos y el deterioro ambiental que produce la sojización. Campesinos, pueblos originarios, peones y jornaleros, son negados sistemáticamente por el uso de un rótulo que sólo sirve para amparar los intereses de los empresarios agroexportadores. Existe, entonces, “otro campo”, sumergido y silenciado por los medios de comunicación, que sin embargo no ha sido ajeno al debate y ha denunciado a través de algunas de sus organizaciones al modelo agropecuario vigente y a la protesta de la patronal agraria.

En segundo lugar, se han querido extender aquellas identificaciones al conjunto de la sociedad, postulando una unidad sin fisuras en torno a los intereses del sector (“Todos somos el campo”). Se han exaltado sus valores y tradiciones como último reaseguro de una sociedad amenazada (“El campo es la reserva moral de la Nación”). Se ha reclamado para las actividades agropecuarias el primer lugar entre los distintos sectores de la economía (“Todos vivimos del campo”). Basta con observar las cuentas nacionales para dimensionar el aporte que efectivamente el sector realiza, que se ubica, según distintas mediciones, entre el 5% y el 10% del producto bruto interno y que da cuenta del 8% del empleo total de la economía. La identidad entre campo y Nación es una vieja estrategia cuyos efectos históricos han sido desastrosos, dirigida a deslegitimar, desconocer e inhabilitar cualquier tipo de diversidad. Una y otra vez, la democracia ha sido interrumpida y la sociedad disciplinada en nombre de la dudosa moralidad esencial de salvadores autoproclamados.

Finalmente, las actitudes de altos dirigentes rurales denotan en muchos casos un evidente tono extorsivo, antidemocrático y racista: desde el orgullo por desabastecer las góndolas, pasando por la propuesta de disolución del Congreso, hasta la legitimación de los piquetes en base al color de piel de sus protagonistas. En este marco, el apoyo de sectores golpistas y de oportunistas electorales ha sido un resultado tan previsible como preocupante. Estos actores sociales irrumpen autoritariamente ignorando los veinticinco años de esfuerzos políticos y sociales que implicó volver a pensarnos como sujetos de la democracia. Reaparece como problema social y discursivo la cuestión de la frágil memoria que parece haber olvidado las consecuencias funestas de los consensos civiles a las soluciones de orden impuestas a los argentinos. Consensos civiles en los que los medios de comunicación hegemónicos tuvieron incidencia directa. Esos medios aún deben a la sociedad la revisión de su propia historia reciente y de sus actuaciones en la formación de una opinión pública favorable a grupos de poder que intentaron justificar discursivamente lo injustificable: la intervención autoritaria y por la fuerza en la historia de los pueblos.

Frente al silencio en las aulas, la desmovilización de varios actores universitarios y las posiciones institucionales inconsultas (que dan también una falsa idea de homogeneidad al interior de la Universidad), pretendemos aportar y participar con estas reflexiones en la construcción de una voz alternativa respecto de las dos posiciones que disputan la escena y que mayor atención concitan.

Santa Fe, julio de 2008

ESPACIO UNIVERSITARIO DE REFLEXIÓN SOCIAL

eurs.unl@gmail.com